

Publicado en la Rev. Fac. Nac. Salud Pública 2000; 18(2): 101-115

Violencia en Colombia: reflexiones de una profesora visitante*

Violence in Colombia: reflections of a visitor professor

*Nina Wallerstein*¹

Resumen

Como profesora de salud pública en Estados Unidos y habiendo tenido la oportunidad de estar en Santafé de Bogotá por un período corto de tiempo, la autora presenta su perspectiva de la violencia en Colombia como asunto que atañe a la salud pública. Aunque no intenta sentar conclusiones, este artículo presenta la gran complejidad de la violencia, desde verlo como epidemia, hasta sus orígenes socioeconómicos y políticos, y sus devastadoras consecuencias psicológicas, sociales y de amenaza a la vida desde hace varias generaciones. Este artículo es tanto una narración de experiencias con académicos, gente de las comunidades, familiares, activistas y profesionales, como también un intento académico por mostrar que la violencia no es caótica e indescifrable sino que tiene raíces sistemáticas y, por ende, oportunidades sistemáticas de mejoramiento. Esperemos que Colombia salga adelante gracias al trabajo de profesionales dedicados al desarrollo de los esfuerzos de la comunidad; gracias a las negociaciones políticas, que aún son débiles; y gracias a las manifestaciones populares por la paz.

Palabras clave

Violencia, paz, salud pública, guerrilla, negociación.

Abstract

As a professor of public health in the United States, the author presents her perspective of violence as a public health issue in Colombia, based on her experiences over a relatively

* Texto originalmente escrito en inglés. Traducido, con autorización de la autora, por Helena E. Restrepo, M.D.

El presente análisis descriptivo sobre la violencia que azota a nuestro país es fruto de una estadía de la profesora Wallerstein en nuestro país, por un período corto pero suficiente para captar la complejidad y gravedad del problema colombiano. Es útil para los salubristas conocer este tipo de evidencias que contribuyen a hacernos cada día más conscientes sobre la necesidad de discutir e intercambiar a nivel internacional diferentes aproximaciones e interpretaciones del problema de la violencia como un asunto de interés para la salud pública. Como quiera que seguramente la narración de la profesora Wallerstein puede dar origen a discrepancias, su intención es reconocer que la interpretación de la situación vivió la autora en sus cuatro meses de estadía es respetable desde todo punto de vista y merece nuestro agradecimiento por haber tenido el interés y el valor de observar científicamente y preguntarse cuál es el significado que tienen las múltiples formas de violencia para la salud pública (Nota de la Tr.).

¹ Ph. D. Directora de la Maestría en Salud Pública del Department of Family and Community Medicine de la University of New México. Visitante en la Universidad Javeriana, Santafé de Bogotá, 1997.

short period of time as a Fulbright scholar in Bogotá. Though not claiming to be definitive, the article presents the far-ranging complexity of the violence, from its epidemiology, to its social-economic-political origins, and its devastating psychological, social and life-threatening consequences over multiple generations. The article is both a narrative of experiences with scholars, people in communities, fellow parents, activists, and professionals, as well as a scholarly treatise to illustrate that the violence is not chaotic and indecipherable, but has systematic roots and therefore systematic opportunities for amelioration. Hope for Colombia is uncovered through the dedication of professionals engaged in community development efforts; through existing, though fragile, political negotiations; and through popular demonstrations for peace.

Key words

Violence, peace, public health, guerrilla, negotiation

Introducción

“La violencia en Colombia es un problema de salud pública”, proclamó Saúl Franco en la inauguración de la Conferencia sobre Salud Pública y Violencia en noviembre de 1997 en Bogotá, “en sus raíces y en sus consecuencias de frontera a frontera, en sus niveles de barbarie, y en la rampante impunidad con que opera”. Y sigue Franco diciendo, “Imaginen que una niña de seis años le preguntó a su padre en la zona rural de Antioquia ‘cuando alguien mata, ¿por qué se muere?’”. Al principio no entendí la pregunta: ¿por qué cuando matan se mueren?, pero al final de su discurso, cuando él clamó por el derecho de la gente a morir de muerte natural, yo comprendí a la niña que relacionaba la muerte con el hecho de matar. ¿Por qué una niña de seis años habla de matar y de la muerte? Yo no podía creerlo.

A lo largo de los cuatro meses que viví en Colombia como profesora de salud pública de la Fundación Fulbright, fui observando los cambios en mis reacciones, leyendo los periódicos de Bogotá, hablando con mis colegas, con los conductores de taxi, con las madres de los compañeros de mi hijo en el colegio, con los estudiantes, artistas y con todo el que podía.

Mi familia y yo fuimos a Colombia por varias razones: porque mi esposo tenía una familia extensa de dieciséis primos a quienes habíamos visitado veinte años atrás, por la posibilidad de trabajar con la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y por la oportunidad para mi esposo y yo de enseñar en universidades colombianas como profesores visitantes. Por supuesto que sabía de la reputación de Colombia como país con una historia de violencia, también de las altas tasas de homicidio, una de las más altas del mundo, seis veces mayor que la de Estados Unidos.ⁱ

Aunque sospechaba que la violencia política de los últimos 100 años había sido sustituida por la de las drogas, allá descubrí que el período llamado “La Violencia” de 1948 a 1964, de retaliaciones entre los partidos Liberal y Conservador, en el cual 200.000 personas habían sido asesinadas, había sido reemplazado por el tráfico de drogas, por la lucha

guerrillera de los últimos 40 años, y también por la lucha entre guerrilleros y los grupos privados paramilitares que se habían extendido rápidamente en los más recientes años. También conocí los datos de que la última década había costado 230.000 vidas que excedían las de “La Violencia” de la década de los 50 y de la “Nueva Violencia” de la década de los 80, debido al terror de los carteles de la droga.ⁱⁱ Lo que sí no sabía, era si esta violencia podía afectarme a mí, a mi familia y mi trabajo en Bogotá. Mi primer contacto directo con esta situación fue a través de un cable del Departamento de Estado de mi país entre los papeles de la Fulbright, en el cual alertaban a todos los americanos a no viajar a Colombia, y si eramos tan incautos de hacerlo, que no viajáramos al interior del país y que nos limitáramos a viajar en taxi de y al trabajo. El memo mencionaba también los crímenes callejeros y los asaltos con escopolamina, dejando de lado la violencia política que afecta las vidas de los colombianos. Si no hubiera sido por la calma y la absoluta responsabilidad profesional de la oficina de Fulbright, seguramente, nosotros no hubiéramos aceptado la posición.

A pesar de que teníamos conocimiento general sobre estos datos de violencia, había aspectos específicos que no sabíamos ni nos imaginábamos. No sabíamos, por ejemplo, que este período que íbamos a estar allí era precisamente el tiempo de elecciones para alcaldes y concejos municipales, y que las guerrillas habían decidido sabotear las elecciones con secuestros y terror porque las consideraban una farsa en el 30 a 40% del campo que ellos controlaban.

Desde Estados Unidos, hemos tendido a ver la violencia en otros países como caótica e incontrolable, como resultado de guerras étnicas, o de facciones religiosas y tribales, de movimientos y acciones de la insurgencia y contrainsurgencia. Con excepción de las guerras civiles de América Latina de las décadas de los 60 y 80, y más recientemente en Chiapas, México, hemos tenido la tendencia a ver la violencia internacional muy lejana: la antigua Yugoslavia, Ruanda, Chechenia, el Medio Oriente. Pero, Colombia está a solamente cuatro horas de Miami y, trágicamente para su gente, ha sido líder en la violencia de las Américas en las tres últimas décadas.

A pesar de la visión de Estados Unidos, en Colombia, “La Violencia” ha sido estudiada exhaustivamente por sociólogos, psicólogos, analistas políticos, profesionales de la salud pública, periodistas, historiadores y activistas, y no pretendo comprender todas las corrientes que se han ligado a su historia. Los profesionales de la salud en Colombia han intentado identificar las dimensiones epidemiológicas de la violencia, su huésped, y factores de riesgo del ambiente y de los agentes. Pero yo, como profesional de la salud pública, nunca había estudiado la violencia o los factores de riesgo de los conflictos. Entonces, mientras vivía en Colombia, empecé a darme cuenta de la necesidad de analizar las múltiples dimensiones de la violencia para poder comprender su importancia en salud pública y sobre todo para desarrollar estrategias de paz. Lo que sigue en este artículo es, por consiguiente, un recuento de mi experiencia en Bogotá, durante los últimos cuatro meses de 1997 y lo que he llegado a comprender de la naturaleza dinámica y compleja de “La Violencia” dentro de su contexto histórico y político.

Estadísticas de violencia del país

Colombia tiene los índices más altos de toda América en morbilidad y mortalidad por accidentes y violencia intencional, con una tasa de 96 homicidios por cada 100.000 personas en la población total y de 123 homicidios entre los hombres, en el año 1994.

El homicidio ha sido declarado como una epidemia, pasando del noveno lugar entre todas las causas de muerte hace tres décadas, al primer lugar a partir de la década de los 80, con un margen creciente de la diferencia entre esta causa y todas las demás y fue responsable del 70% de todas las muertes violentas del país en 1994.ⁱⁱⁱ En 1995 hubo además un aumento del 15% de las lesiones no fatales. Los datos de 1994 indican que las tres ciudades más grandes, Bogotá, Cali y Medellín dan cuenta del 50% de todos los homicidios que ocurren en el país, reflejando la urbanización del problema.²

Estadísticas de Medellín de 1994-1996 indican que la mitad de los años potenciales de vida perdidos (APVP) son causados por lesiones intencionales, de las cuales el 98% son homicidios. El 57% de los homicidios ocurren en la clase socioeconómica más baja, el 39% en clase media y sólo el 3,5% en la clase más alta, lo que refleja una distribución inequitativa para la población con las condiciones económicas más desfavorables.⁴

Otro índice importante, los años potenciales de vida saludable perdidos por incapacidad o años de vida saludable ajustados por discapacidad (AVISA), muestra que el porcentaje más alto de AVISA por lesiones intencionales es para los colombianos del 18 a 27% del total de años perdidos mientras que en otros países latinoamericanos es de 3,3% y 1,4% a nivel mundial.

El costo de los homicidios y lesiones intencionales es muy significativo para la economía colombiana, y tiene dos componentes: los costos directos que comprenden la suma de atención médica, seguridad para prevención y captura de los involucrados, más los ocasionados por los procedimientos judiciales de los procesos penales y de policía, encarcelamiento, etc., y los costos indirectos que corresponden a la pérdida de ingresos para la sociedad tanto de las víctimas como de los agresores encarcelados y los años de vida saludable perdidos por incapacidad o por muerte prematura. El costo de años de vida perdidos por incapacidad representa el 1,3% del Producto Nacional Bruto (PNB) para hombres y 0,4% para mujeres. En 1995, el total de costos directos e indirectos fue de 61 millones de dólares que corresponde al 0,076 del Producto Interno Bruto (PIB).⁵ Muchos de los costos judiciales son todavía desconocidos a causa de la impunidad reinante, como lo demuestran los informes nacionales de la policía, que estiman que sólo en el 17,2% de los casos se aprehende al asesino y muchos menos casos son condenados por la justicia.¹

Además de los costos y del sufrimiento que produce el homicidio, el efecto de la violencia política sobre la población total ha sido muy severo, con el número de refugiados internos y de campesinos desplazados en nuestro hemisferio. Las cifras de desplazados en la década de los 90 desde 1985 ha aumentado de 300.000 a 900.000. Los individuos no envueltos en

los conflictos han tenido o que huir de las zonas de guerra, debido a las amenazas físicas o a la incapacidad de vivir en ciudades flotantes o crear comunidades de refugiados donde no tienen ni la infraestructura ni la protección internacional o la asistencia a refugiados que cruzan fronteras.⁶

Con uno de cada 60 colombianos forzados a migrar entre 1985 y 1994, el acceso a la atención de salud, las campañas de vacunación y el control de vectores de enfermedad, han declinado significativamente, solamente el 22% de las familias de los desplazados reciben atención médica.¹

Violencia como problema de salud pública

¿Qué significa la violencia como un problema de salud pública para los colombianos y para los norteamericanos, en el contexto de salud internacional?

Significa la violencia ejercida por los grandes terratenientes que controlan la tierra (en Colombia la reforma de la tierra ha sido insignificante a pesar de la aparente democracia), donde la población no puede ganar lo suficiente para vivir como campesinos en sus propias parcelas de tierra. Tuve conocimiento de una familia que vivía de lo que ganaba a la semana su hijo de once años por lavar bananos en una plantación.

Significa que algunas de las pocas oportunidades de trabajo en el campo es trabajar en sembrados de coca o convertirse en un miembro de los grupos armados (muchachos de catorce años que se unen a la guerrilla para poder comer). Estos mismos jóvenes, para poder tener vestido y comida, se cambian a los paramilitares, cuando la guerrilla es hostigada y obligada a salir de la región. La libertad y los derechos humanos, derecho a la vida, a su propio cuerpo y al trabajo no existen para estos jóvenes.⁷ Diferentes fuentes de estadísticas hablan de cifras de 7.000 a 15.000 jóvenes por debajo de los dieciocho años envueltos en el conflicto armado; aproximadamente 2.000 en las guerrillas, y el resto, hasta un 50% en algunas regiones, está en las filas de los paramilitares y del Ejército Nacional. Una iniciativa de paz muy importante, de la Agenda Internacional de UNICEF y la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, establece que los grupos armados, incluyendo el ejército oficial, se abstengan de reclutar menores de dieciocho años.

Significa que la violencia como problema de salud pública, produce la migración desde el campo a ciudades como Bogotá, donde el desempleo es tan alto que las únicas oportunidades de empleo es vender en las calles, en la llamada “economía informal” (50-60% de la economía total), juguetes, libros, frutas, chicles, limpiar vidrios, o hacer cualquier cosa similar.

En la mitad de nuestra estadía, un muchacho que no parecía ser mayor que mi hijo de ocho años, estableció un puesto de venta de café diario a las 6 a.m., en la vía de mi casa al punto de parada del bus del colegio de mi hijo. Veía a mi hijo, feliz, soñoliento, bajando la cuesta con su uniforme del colegio y su mochila escolar. En cambio él, trabajaba, cargando dos

pesadas bolsas plásticas con unos termos de café, cigarrillos y panes, llevando su pesada carga en la loma, para armar la tienda sobre cartones y tablas viejas. Pablo, ese era su nombre, me contó que no iba a la escuela, pero su voz cambió cuando me contó que el año próximo cambiaría porque su jefe había encontrado una escuela que funcionaba todo el día los sábados, lo cual no interferiría con su trabajo. La historia de Pablo es un recordatorio de la realidad detrás de las políticas neoliberales por las cuales las economías latinoamericanas han salido de la crisis de la década de los 80 para alcanzar un crecimiento del 3%, a un costo igual de crecimiento de la tasa de pobreza. A través de la privatización de los servicios públicos y los cortes dramáticos al gasto gubernamental, la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado tremendamente. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha calificado la década de los 90 como “la generación perdida”, de la que entre el 30 y el 50% de América Latina vive en la pobreza, y más de 50% de los niños no puede terminar la escuela primaria.

¿Significa la violencia, como problema de salud pública, el miedo a la violencia callejera que intimida a los ciudadanos que nunca puedan aventurarse a caminar por el centro o por los barrios del sur de la ciudad? ¿Incluye esa violencia el comercio internacional de armas que alimenta el poder de los grupos armados en la sociedad colombiana? Comercio que es legal, si es con la participación del gobierno americano que arma a los militares colombianos y a los paramilitares, pero ilegal cuando se trata de los narcotraficantes y del mercado negro. A menudo las armas legales se vuelven ilegales, como cuando los paramilitares las usan para proteger a narcotraficantes. Los grupos armados hacen las carreteras intransitables, la infraestructura vulnerable, y aterrorizan a los campesinos. Los innumerables daños a la infraestructura, puentes, carreteras, torres eléctricas, y oleoductos causan escasez de alimentos y otros bienes para toda la población, incluyendo a los soldados del gobierno estacionados en las regiones donde se lucha.

¿Significa la violencia, como problema de salud pública, la impunidad que permea cada sector? Se encuentra al más alto nivel, aun desde el ex gerente de la campaña presidencial del presidente Samper a quien se le alega que solicitó 6 millones de dólares al cartel de la droga de Cali y quien fue condenado por enriquecimiento ilícito a un cómodo arresto de cinco años en casa, con sirvientes y piscina.

Esta impunidad se siente a nivel de los jóvenes marginados, contratados como asesinos, “sicarios”, por los señores de la droga y que reciben de US\$100 a 5.000 por vida, y raramente son aprehendidos por la justicia. Es la impunidad inversa que se les garantiza a la policía y a los militares que cometen brutalidades contra los habitantes de los barrios marginados y los campesinos, en nombre de la guerra a la droga. Es la impunidad de los afamados líderes del cartel de la droga, en libertad o reclusos en cárceles colombianas especialmente construidas para garantizarles su seguridad, y quienes aparentemente pueden comprar a miembros del Senado para derrotar la ley de extradición o por lo menos, prevenir la extradición retroactiva por sus crímenes.

¿Significa un problema de salud pública la exagerada cantidad de población desplazada de su entorno natural a los medios urbanos, en las condiciones más trágicas desde todo punto de vista? Esta población de desplazados es un problema agudo de salud pública.

En resumen, la violencia como problema de salud pública es la que afecta la vida de las personas en todos sus ambientes, es la que se vuelve un determinante fundamental de los niveles de mala salud y pésima calidad de vida. La inseguridad, el miedo y la pobreza condicionan una situación muy deplorable de la salud pública de un país.

Características de la violencia en Colombia

Cabe preguntarnos, ¿cómo se caracteriza este problema de violencia en Colombia? Intentaré presentar mi percepción: La violencia es un problema nacional, a muy alto nivel e incrustada en el contexto particular político histórico de Colombia. Como toda violencia de países desarrollados o en desarrollo, es multicausal y atraviesa todo el tejido social. También, como lo afirmó Saúl Franco, en la mencionada Conferencia nacional sobre violencia,

la violencia es la imposición de la fuerza al servicio de intereses de grupos particulares. Consiste en actos cometidos asimétricamente, con la consecuente negación de los derechos de sus víctimas. No es el producto de la determinación genética, el azar o la ausencia de lógica. Es una actividad humana inteligente y consciente con un propósito definido que nace del desarrollo de ciertas relaciones entre humanos. Es conforme con procesos históricos cambiantes... un lenguaje sin palabras, tanto físico como simbólico.²

Y lo físico y simbólico es penetrante.

Porque la violencia partidista en el país terminó con la declaración de ambos partidos políticos de una alternancia del poder durante cuatro años, comenzando en la década de los 50, parece haber un sentimiento de desesperanza con respecto a “La Violencia.” Esta es parte de la cultura del país, dice la gente. Colombia no ha tenido las dictaduras militares del tipo que sufrieron otros países de Sur América; la aparente democracia parece haber creado una pasividad al ultraje. La gente suele decir: esto es “complicadísimo” al hablar de su historia de violencia; ninguna explicación es posible. Se ha vuelto normal arreglar los conflictos con violencia, y encogerse de hombros como otra forma de vida.

Aun Gabriel García Márquez en su libro *Memorias de un secuestro*, refiriéndose a la tiranía de la violencia de Pablo Escobar en la década de los 80, escribió, “Tal vez el aspecto más colombiano de la situación era la capacidad de asombrarse de la gente... acostumbrados a todo, lo bueno y lo malo, con una elasticidad que puede ser la más cruel de las formas de valor”. Es su complacencia, incredulidad, o, de hecho, la capacidad de las personas a vivir su vida. La ironía de este año de elecciones es que es la tercera vez que se eligen alcaldes por voto popular, en vez de ser designados por el Estado.

Del lado psicológico, el psicoanalista Óscar Espinosa declara,

Nuestra situación como nación se parece a la de Macbeth: asesinada la legalidad y reemplazada por mentiras piadosas; cuando no cínicas, nos precipitamos en el abismo de acciones criminales sucesivas que se vuelven contra todos porque en cierta manera todos somos cómplices de la arbitrariedad. [...] Violencia y mentira son interdependientes: se mata entre otras cosas, para no decir la verdad, la verdad de una situación política, de un beneficio económico, o la verdad de otro crimen cometido. Si se dice la verdad, en cierta manera se pierde el poder y quedan muchos privilegios amenazados de extinción; además la verdad es hija de la libertad.⁸

Aunque la violencia ha cambiado con relación a la violencia de la droga de la década de los 80, la guerrilla y los paramilitares son actores importantes para entender la epidemiología de la violencia. El movimiento guerrillero, con una historia de 40 años, se inicia con el objetivo real de las inequidades, de las revoluciones que trajera a América Latina la justicia social; este movimiento ha sufrido épocas de severa represión. Cuando un grupo de guerrilla entregó las armas en la década de los 70 para formar un partido político, La Unión Patriótica, sus miembros fueron asesinados por los escuadrones de derecha. “Las guerrillas aún tienen que ser consideradas una fuerza política legítima” dice Pedro Valenzuela, un analista político y director del programa de resolución de conflictos de la Universidad Javeriana. “Primero que todo, tienen una historia, una ideología de justicia social y de reforma agraria. Segundo, tienen una base en el campo; ellos no podrían controlar un tercio del país sin esa base. Tercero, ellos son un movimiento rico, riqueza proveniente de los secuestros (de hacendados y empresarios) y en algunas zonas del narcotráfico”. Las FARC, entraron al negocio de la droga lentamente desde el comienzo de la década de los 80, al principio y todavía ofreciendo protección a los campesinos que cultivan amapola y coca. Luego, viendo lo lucrativo del negocio, entraron a la producción y distribución. Pero esta conexión no es monolítica y varía regionalmente. Los grupos paramilitares, en una gran proporción apoyan y ganan dinero también del narcotráfico. En un periódico apareció que once investigadores judiciales acompañados de soldados que iban a una finca a erradicar sembrados de coca y a decomisar la tierra, se encontraron con una caravana de dos camiones cargados de coca, protegidos por paramilitares. Los oficiales del gobierno capturaron a los paramilitares, pero de regreso a su base, otros 200 paramilitares los atacaron desde la cima de una pequeña montaña.

El movimiento paramilitar creció en forma de grupos armados contra la guerrilla en la década de los 80, contratados por compañías petroquímicas, hacendados, ganaderos, para protegerlos de secuestros y proteger sus propiedades. Los paramilitares se organizaron, al parecer, con el apoyo tácito evidente de los militares. En la década de los 90, han desarrollado sus propios intereses, negocio de drogas y un liderazgo nacional (con muchas localidades bajo su estructura de control).

En los últimos años, hemos leído que se han institucionalizado las “Convivir,” Ligas de autodefensa, que reciben autorización para organizarse cuando un gobierno civil o militar local no puede controlar la región. Por la primera vez en la historia de los paramilitares, las Convivir han recibido armas directamente de las fuerzas militares colombianas. Su legalidad fue confirmada por la Corte Suprema que opinó que es constitucional que los ciudadanos se armen para su autodefensa. Unos amigos nos dijeron que este solo acto del gobierno, la distribución y proliferación de armas, hizo posible una escalada de violencia muy grande. El aumento de armas, se ha relacionado internacionalmente con el aumento de las probabilidades de muertes violentas, y con la mayoría de las muertes de civiles.⁹ Amnistía Internacional ha condenado recientemente a los paramilitares por los desplazamientos, “no como un producto casual, esporádico de las operaciones de contrainsurgencia... [sino como] un arma crucial en la estrategia de las fuerzas armadas y de sus aliados paramilitares”.

El efecto de la violencia política en esta década es penetrante. En el plano económico, Colombia se ha visto imposibilitada para explotar sus bellos recursos naturales y la biodiversidad para la industria turística. Su relación con la América Latina cada vez más globalizada y con los mercados mundiales se ha hecho más frágil; las compañías nacionales y multinacionales no pueden resistir las constantes amenazas a su personal y a su infraestructura. En el plano militar, se informa que la moral del Ejército es cada día más baja con los constantes ataques de la guerrilla. En el plano internacional, las tropas colombianas son incapaces de evitar los secuestros de soldados de otros países en sus fronteras por los grupos guerrilleros.

Las relaciones con Estados Unidos permanecen tensas, cada lado peleando en su arena política. Y aún con el nuevo paquete para Colombia de 1,3 billones de dólares del Congreso de Estados Unidos, hay muchas dudas si este dinero va a ser positivo o no para la paz. Con cuatro quintas partes de ese dinero destinadas a ayudar a los militares de Colombia, ostensiblemente a erradicar el comercio de la coca, la pregunta es ¿cómo se evitará que esta ayuda militar no sea usada contra la guerrilla y de esa forma escalar la guerra civil?¹⁰ Como dijo un editorial de *El Espectador*, “¿Cuántos colombianos que hoy están vivos, que tienen ilusiones y que sudan rebuscándose, morirán con la decisión del Congreso estadounidense?”¹¹

No hay duda de que la violencia afecta la vida diaria de la gente en los campos, desde los candidatos políticos hasta los campesinos locales. De un lado, se está más seguro si la región está controlada por los paramilitares o las guerrillas, en tanto no haya conflicto armado que caiga sobre la población civil. Pero, los números de personas desplazadas, y el gran número de refugiados internos sigue creciendo. Una población satélite del sur de Bogotá de un millón de habitantes, declara que la mayoría son desplazados.

La violencia (real y simbólica) a nivel emocional, artístico y psicológico, nunca desaparece. Una noche estuvimos en una obra de teatro experimental sobre la vida de las mujeres en Colombia. El argumento se centraba en siete mujeres secuestradas que procedían de diversas clases sociales, amas de casa de nivel medio-alto, mujeres ejecutivas, una

prostituta, una estudiante joven, ninguna sabía por qué estaban secuestradas ni qué les iba a suceder. La incomunicación con el exterior, con una constante violencia amenazante de parte de sus desconocidos e invisibles secuestradores, las hizo volverse contra ellas mismas y empezar a condenar la forma de vida de cada una, su falta de moral o falta de valor. Fue muy estremecedor.

Conocimos una amiga escultora, con exposiciones y reconocimiento internacional cuyo trabajo se centra sobre “La Violencia”, transportando al arte la experiencia de la gente que ha sufrido tragedias y actos violentos. Su trabajo lo hace a partir de la experiencia de niños que han sido testigos de la muerte de uno o ambos padres. Ella va a zonas de violencia, con frecuencia con la ayuda de la iglesia, a entrevistar a los niños y retorna a Bogotá con objetos como zapatos o cabello para ser instalados dentro de sus obras escultóricas. Después de cada pieza, ella queda exhausta y no puede moverse por varios días. Pero, según ella, no puede descansar ni parar de producir este tipo de arte.

Intervenciones para reducir la violencia

En la mitad de nuestra estadía, comencé a aprender del trabajo contra “La Violencia”. Empecé a entender que la violencia política no era al azar y que la negociación entre el gobierno y la guerrilla era un primer paso. Si podía detenerse la violencia política (solamente entre el 10 y el 15% de los homicidios son políticos); si podían detenerse los secuestros políticos (que habían conducido a otros secuestros hasta por pequeñas deudas); si la tierra era redistribuida y el poder compartido, entonces la violencia y el crimen diarios también podían controlarse.

Cuando di talleres sobre empoderamiento en ciudades fuera de Bogotá, comencé a darme cuenta de que al ser capaz y al empoderamiento se les ve como “complicadísimos” y contradictorios. ¿Es el empoderamiento benéfico para la comunidad o solamente sustituye un grupo poderoso por otro? ¿Cómo podrían crearse oportunidades para que la gente expandiera su poder, cuando parece haber tan pocas fuentes legítimas de poder? Ciertamente no hay legitimidad en el gobierno nacional, especialmente, cuando la impunidad en los procesos protege a todos desde los señores de la droga, los más altos oficiales, los criminales de la calle hasta la policía. Ciertamente no hay legitimidad en el poder que viene de la punta de un arma, ya sea ésta disparada en defensa propia o en forma deliberada. El empoderamiento de líderes locales puede entenderse también como el empoderamiento de los líderes de la guerrilla o de los paramilitares (quienes, después de todo son los líderes locales). El coordinador de salud pública, de un proyecto de desarrollo integral del BID en una zona de conflicto, me dijo que sabía de esto porque había trabajado en diferentes pueblos con la guerrilla o con los paramilitares y sólo confiaba en que el liderazgo evolucionara para dejar de ser sólo solución de conflictos a través de las armas. Yo estaba asombrada de ver personas que trabajaban en zonas de conflicto armado o en la defensa de derechos humanos con Organizaciones no gubernamentales (ONG), haciendo desarrollo comunitario, o simplemente siendo testigos de la lucha de las comunidades por la paz. Durante mi tiempo en Colombia supervisé a una estudiante de maestría de salud

pública de la Universidad de Berkeley, California, quien estaba haciendo su internado en una así llamada “comunidad de paz” en una zona controlada por los paramilitares. La Junta comunal estaba aprendiendo lentamente que una comunidad de paz no era solamente declararse zona pacífica, donde no pudieran entrar grupos armados, sino encontrar nuevas vías para lidiar con los conflictos. Aunque mis labores de enseñanza y mi vida diaria en Bogotá no tenían traumas, mi propio trabajo se veía afectado sutilmente por la constante zozobra de la violencia. Antes de las elecciones traté de no viajar a ninguno de los proyectos de municipios saludables u otros proyectos educativos. Me volví obsesiva por la lectura diaria de los actos de violencia, los secuestros, las masacres (había una constante avalancha de noticias), y por tratar de entender cómo vivía la gente. Para muchas personas, ciertamente para los profesionales que conocí y para mi familia (que no eran objetos directos de violencia ni campesinos huían de las matanzas), había una normalidad en la tensión. Simplemente vivían sus vidas, tratando de hacer su trabajo y de que sus hijos estudiaran. Entre más conocía donde laboraban los trabajadores de salud pública y los activistas de derechos humanos, más los admiraba.

A pesar de todo, en este período, pude ser testigo y aprender algunas iniciativas importantes de salud pública sobre violencia. El Alcalde de Bogotá había decretado varias políticas públicas que, de acuerdo con el representante de la OPS en Colombia, eran las más importantes del país. En 1995, uno de sus primeros actos fue prohibir la producción y venta de pólvora, comunes en las fiestas de Navidad y otros festejos, que producían cada año múltiples quemaduras especialmente a niños. En tres años, las heridas y quemaduras en niños de diez a catorce años de edad habían disminuido en un 39%. Otra iniciativa de política de los dos últimos años en Bogotá, fue sostener cinco días de desarme al público, *Qué las armas descansen en paz*. Se dio amnistía completa a quien entregara las armas sin hacerle ninguna pregunta. Para ello, el Alcalde hizo alianzas con la Iglesia católica y la industria privada; pero tuvo que resistir la insistencia de la policía y de los militares que querían hacer parte de la alianza (posteriormente el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional desautorizaron esta alianza). Unos días antes de las elecciones de octubre, el depósito de armas pasaba de 2.500 kg (dos toneladas y media) que fueron fundidos para hacer cucharas para niños, como un símbolo de paz y vida. Un día antes de las elecciones, el Alcalde patrocinó el día de desarme infantil en el cual los niños y jóvenes de las escuelas de toda la ciudad, depositaron sus armas de juguete en recipientes durante una fiesta en la plaza central. En este año de 1997, el Alcalde decretó también el cierre a partir de la 1 a.m. de establecimientos y clubes nocturnos donde se consume licor, con el fin de reducir las lesiones por accidentes de tránsito, por embriaguez, riñas, etc.

Cada una de estas simples iniciativas de política tenía un objetivo común de salud pública: eliminar o controlar los “agentes” de violencia, por ejemplo, el arma de fuego, el alcohol, la pólvora, y transformar el ambiente social de aceptación del abuso de estos agentes. Como estrategia de salud pública es una lección importante para Estados Unidos.

Además de estas acciones en la ciudad más grande de Colombia, el Ministro de Salud, con apoyo de la OPS, estaba creando sus propias iniciativas, como la de los Municipios Saludables por la Paz y contra la Violencia. Al final de 1997, el Ministerio organizó dos

conferencias en las cuales se declaró la violencia como primer problema de salud pública y se promovió el desarrollo del movimiento de Municipios Saludables por la Paz. Este programa ha sido apoyado por la OMS y la OPS en los últimos seis años en América Latina. Pero Colombia, y así debe ser, es el primer país que lo enfoca con la estrategia hacia la paz. Visité varios de estos sitios y me quedé muy impresionada con el trabajo de los grupos comunitarios de base, la formación de microempresas y negocios por los grupos de mujeres, por ejemplo la cría de pollos, mejorando así la nutrición y el presupuesto familiar. El ingreso adicional de las mujeres iba acompañado de un estatus más alto en sus familias.

Uno de estos Municipios Saludables que visité fue Versalles, Valle, un pueblo que había sido azotado por la violencia política desde la década de los 50. En 1987, el nuevo médico recién graduado que llegó a hacer su medicatura rural inició un proyecto comunitario de salud afirmando que “la participación comunitaria es la vacuna para la gente”. Los años que lleva esta organización comunitaria ha producido muchos resultados tales como el desarrollo de microempresas (como la de cría de pollos), la farmacia, la reforestación de bosques, y una casa campesina en la cabecera del municipio, para albergar a las embarazadas rurales antes del parto hospitalario. Todo este proyecto no sólo redujo las muertes maternas sino también las muertes por violencia que cayeron de 22, en 1993 a una, en 1997. “Yo veía cerca de 30 a 40 hombres heridos por machete o por golpes de puño semanalmente en el hospital,” dice el doctor Valencia, “y ahora sólo uno o dos al mes.”

A pesar de la aparente normalidad de la vida bajo las amenazas de la violencia, la gente parecía estar exhausta y en busca de cualquier vía de salida. Durante las elecciones de octubre de 1997, la UNICEF con otras ONG montaron un voto de paz, donde la gente podía votar por la paz en una ficha separada. El día de las elecciones, a pesar de las amenazas previas, incluyendo amenazas a los choferes de buses en las áreas rurales, la gente salió a votar; más de 10 millones de personas, más del 50%, dieron el voto por la paz. Más asombroso aun, fue el anuncio del presidente de la Asociación de Ganaderos, al ofrecer su participación en dichas negociaciones, y declarando que para la reforma agraria, la disponibilidad de tierra no era un impedimento. Las comisiones nacionales de paz se habían estado reuniendo y los candidatos a la presidencia para 1998 tenían sus propias iniciativas al respecto.

Sin embargo, este proceso es largo y tortuoso y nuestros amigos y colegas sentían que iban a morir muchos más, antes de que las negociaciones comenzaran. Justo antes de dejar el país, en diciembre, supimos de una ofensiva paramilitar contra campesinos para quitar el control por las guerrillas (pero dijeron que era para apoyar el voto por la paz, en una terrible y cínica tergiversación de la lógica). Esta última ofensiva parecía completamente subrealista, excepto por la realidad de las tragedias. En noviembre, inmediatamente después de las elecciones, en cinco departamentos, los paramilitares masacraron varias personas, hirieron a otras, quemaron uno de los pueblos, forzando a más de 1.000 personas a huir y a unirse a las masas de desplazados. Como resultado de esta ofensiva, la prensa, que usualmente se enfocaba en los secuestros y asesinatos de las guerrillas (especialmente antes de las elecciones), publicó una tabla que mostraba las muertes por violencia política del año, mes por mes. En cada uno de los meses, las muertes por paramilitares eran de tres a

cuatro veces superiores al número de las muertes atribuidas a las guerrillas. Los paramilitares eran de temer; con la idea de reconquistar las regiones tomadas por la guerrilla, se habían comprometido con una estrategia contradictoria: utilizar las masacres y la brutalidad (por ejemplo, decapitando a sus víctimas) para sentarse como actores político-militares en las mesas de negociación, al mismo tiempo que alienaban a la población y al gobierno con sus acciones. Las escaladas de violencia de este año de elecciones, y de los años siguientes, tanto de los paramilitares como de las guerrillas, tenían los patrones de El Salvador y otros países centroamericanos donde la violencia se volvió una estrategia para demostrar fuerza, justo antes de las negociaciones.

Conclusiones

Después de estos cuatro meses de estadía en Colombia, empecé a desarrollar un marco para examinar el fenómeno de la violencia en ese país. Como Levy y Sidel habían escrito en *War and Public Health*, existe la necesidad de caracterizar a la violencia de la guerra y los conflictos dentro de factores de riesgo definidos para poder diseñar intervenciones de paz.⁶ Colombia comparte muchos factores de riesgo de otros conflictos del siglo XX, tales como la proliferación de armamento en manos de ciudadanos, el crecimiento de lo militar, la pobreza y la inequidad en la distribución de la riqueza, los asaltos a civiles, y el poco valor que se da a los derechos humanos, especialmente a los derechos de los niños.

Las consecuencias directas e indirectas de esta violencia seguían patrones universales: una alta tasa de muerte por homicidio, la destrucción de la infraestructura y de los servicios en zonas de conflicto, la falta de servicios para desplazados y refugiados, el trauma físico y psicológico de los combatientes jóvenes, la violación de los derechos humanos, el daño al desarrollo económico y al ambiente, y finalmente los costos de la sociedad por las pérdidas y gastos en salud, educación y desarrollo para suplir las extremas necesidades humanas. Sin embargo, en Colombia, las dimensiones específicas económicas, políticas y culturales, deben tenerse en cuenta. Aunque estoy lejos de ser una experta en “La Violencia”, fue claro para mí que los cambios históricos y políticos de ésta a lo largo del tiempo, ponen la discusión sobre factores de riesgo, en una red intrincada y dinámica de diferentes percepciones, acciones y condiciones. Colombia tiene ahora el movimiento guerrillero más grande de las Américas, un inverosímil crecimiento de las unidades paramilitares desde la década de los ochenta, un aumento del flujo de armas de Estados Unidos a los militares colombianos, y un flujo de drogas de Colombia a otros puntos del norte. Nunca ha sido más evidente la necesidad de una reforma de la tierra, y, ciertamente la producción de droga, con su violencia resultante no puede ser atacada sin una reforma agraria. El juego entre drogas, paramilitarismo y fuerzas de las guerrillas, varía considerablemente en las diferentes regiones del país.

Los factores de riesgo y las condiciones importantes para Colombia, por consiguiente, deben extenderse más allá de los tradicionales factores de salud pública psicosociales relacionados con violencia, tales como la proliferación de armas, la pobreza y las normas para la solución de conflictos. La historia cambiante de la naturaleza de la violencia, los

aspectos claves de la reforma de la tierra y la producción de droga, la falta de legitimidad gubernamental y la incapacidad, a todos los niveles de la sociedad, para castigar son fundamentales para entender las fuentes de la violencia colombiana. Además de factores físicos de riesgo, la prolongada duración de los conflictos y su reciente intensidad han conducido a una aceptación cultural y psicológica de la violencia (que no encuentra negación ni resistencia). No podría adivinar si la normalización de la violencia no sería un síndrome de estrés postraumático, dentro del cual, incluso la gente que no la hubiera experimentado personalmente podría ser capaz de mantenerse sana bajo la amenaza potencial constante y amorfa.

No puedo decir que me sentía triste de dejar la tensión de Colombia en ese diciembre, pero sí estaba muy acongojada de que, cuando ya me iba, estaba apenas conociendo personas que querían introducirme en su trabajo con desplazados, con comunidades declaradas a favor de la paz, con organizaciones de base de mujeres y jóvenes. Aunque las noticias parecían, a veces, no dar esperanzas, los profesionales de salud pública, los activistas y los empleados públicos de alto nivel tenían compromisos a largo plazo, desde simple actos de permear los currículos de estudiantes de ciencias de la salud, con los aspectos de violencia, hasta talleres con las comunidades sobre cómo denunciar los abusos de los derechos humanos y para desarrollar programas de desarrollo comunitario a largo plazo. El voto por la paz de la UNICEF, los sistemas de vigilancia de la violencia, las aperturas a la negociación, las políticas para desarmar a los ciudadanos, la vigilancia para mantener a los jóvenes por fuera del conflicto y de la reclutación en grupos armados, la ayuda a los desplazados campesinos, en fin, la discusión de la violencia como problema de salud pública, todo esto marcaba una diferencia.

En los últimos años desde que regresé a Estados Unidos, Colombia ha tenido una escalada de violencia, paradójicamente simultánea con las iniciativas de paz del gobierno y los ciudadanos. El actual presidente, Andrés Pastrana, elegido en mayo de 1998 inició varias rondas de negociación con las FARC, el grupo más numeroso de guerrilla y, más tarde con el ELN. El día que empezaron las negociaciones con las FARC, en enero de 1999, los paramilitares arrasaron poblaciones matando más de 150 personas. Unos pocos meses más tarde, un área del tamaño de Suiza, San Vicente del Caguán, fue cedido al comando de las FARC, bajando el número de muertes violentas, aunque reprimiendo a sus opositores dentro de ese territorio. En noviembre de 1999, miles de personas se tomaron las calles en las ciudades en una marcha organizada de paz urgiendo la terminación de la guerra.

Las negociaciones pueden estar progresando, pero temo la influencia que puedan tener 1,3 billones de dólares de Estados Unidos para ayuda, en su mayor parte, militar. Con esta clase de dinero, ¿cómo puede continuar Colombia apoyando a sus ciudadanos para que sigan trabajando por la paz a pesar de sus temores? Pienso que lo que me parecía más temible durante mi estadía como profesora visitante y como profesional de la salud pública era la “normalidad” de la violencia en Colombia. Recuerdo que cuando viví en Bogotá, me encontraba día tras día, incrédula ante las noticias y sentía que fácilmente podía sucumbir a la creencia de que la violencia se daba por azar y que era imposible de controlar. Esta aceptación de la normalidad de la violencia representa el peligro de lo simbólico, cómo el

continuo bombardeo de informaciones sobre nuevas víctimas y conflictos, y el poder indiscriminado que los grupos armados, pueden crear y lograr un desempoderamiento para actuar.

No obstante, la violencia en Colombia puede ser descifrada, entendida, caracterizada. El análisis crítico de las condiciones cambiantes y del intercambio entre los factores de riesgo pueden proveer una estructura para la acción a nivel comunitario, nacional e internacional de las instituciones, de los pueblos pequeños, de las ciudades, que incluya negociaciones de necesidad urgente y nuevas políticas públicas saludables. No puedo asegurar que me fui esperanzada pero tampoco sin esperanza, sabiendo que la gente que conocí estaba trabajando por sus vidas y trabajando día a día por la paz.

Referencias

- 1 Pan American Health Organization. Health in the Americas. Vol. I, II.. Washington, D.C.: 1998. (Scientific Publication No. 569).
- 2 Franco Agudelo S. Violence and health in Colombia. Rev Panam Salud Pública 1997; 2(3):170-180.
- 3 Centro de Referencia Nacional Sobre Violencia. Reporte del comportamiento de lesiones fatales y no fatales en Colombia, 1994. Santafé de Bogotá: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; 1995.
- 4 Londoño JL, Grisales H, Fernández SY, Agudelo B, Sánchez JM. Años potenciales de vida perdidos por la población de Medellín, 1984-1996. Rev Fac Nac Salud Pública 1999; 16(2):82-107.
- 5 Banco Interamericano de Desarrollo. Dimensionamiento de la Violencia en Colombia. En: Documentos de Trabajo de la Red de Centros, Serie de Documentos de Trabajo. Cali: Centro de Investigaciones Salud y Violencia, Universidad del Valle, Facultad de Salud 1998.
- 6 Levy B, Sidel V. War and public health. New York: Oxford University Press; 1997.
- 7 Geiger J. The Impact of war on human rights. En: Levy and Sidel (eds). *Op. cit.* p. 39-50.
- 8 Espinosa Ó. La violencia en Colombia. En: El caballo y el jinete. Pereira, Colombia: José María Calle; 1995.
- 9 Foege WH. Arms and public health: A global perspective. En: Levy and Sidel (eds). *Op. cit.* p. 3-11.
- 10 Prieto G. Our new war in Colombia. New York Review of Books April 13, 2000; XLVII (6):34-39.
- 11 Molano A. Apocalypse now. El Espectador. Santafé de Bogotá. 27 de junio de 2000.